

PROTEGIENDO A LOS JOVENES REFUGIADOS EN ECUADOR:

Una evaluación de salud y bienestar

Escrito por Elizabeth Donger, Arlan Fuller, Jacqueline Bhabha y Jennifer Leaning

Nos gustaría expresar nuestra profunda gratitud a Jen Leigh, Miriam Chernoff, Abby Rudolph, Matthew Mimiaga, Lina Zhou, Janine Hightower y Harry Han por su apoyo analítico. También quisiéramos agradecerles a Ben Leaman y Susan Lloyd McGarry por aportar su experiencia y dedicación en la elaboración de correcciones y de este formato.

Copyright © 2017 FXB Center for Health and Human Rights. Todos los derechos reservados.

Resumen ejecutivo

Refugiados adolescentes de todo el mundo, después de vivir por años en desplazamiento prolongado, se están mudando cada vez más a grandes ciudades en busca de mayor seguridad y oportunidades. Este estudio representa el primer esfuerzo sistemático de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) enfocado en comprender el impacto que ha tenido su labor de protección de adolescentes refugiados urbanos. Este informe se centra en los jóvenes que viven en las ciudades de Quito y Lago Agrio, Ecuador, y tiene dos objetivos de investigación: primero, definir y describir el sistema de protección para los adolescentes urbanos refugiados y el rol que tiene ACNUR dentro de ese sistema. segundo, evaluar los efectos de este mismo sistema de protección en la salud y el bienestar de los jóvenes refugiados, examinando una serie de indicadores relacionados con la educación, los medios de sustento, la salud psicosocial y física, la vida familiar, la seguridad y violencia y el conocimiento y uso de programas disponibles.

Para lograr los objetivos descritos se implementaron cuatro métodos de recopilación de información: revisión de literatura, grupos de enfoque con adolescentes refugiados, entrevistas con actores clave dentro del sistema de protección y una encuesta dirigida a 299 adolescentes refugiados entre las edades de 15 y 19 años. Para la aplicación de dicha encuesta, se utilizó el método conocido como *Respondent Driven Sampling (RDS)*, que usa un modelo de referencia en cadena para extraer una muestra estadísticamente representativa de poblaciones ocultas, conectadas socialmente y de un tamaño desconocido.

El análisis RDS se realizó con datos de Quito, donde la muestra puede considerarse una aproximación cercana de la población más amplia de jóvenes refugiados de la ciudad. Las referencias entre pares en Lago Agrio ocurrieron de forma particularmente lenta, debido a factores como las pocas conexiones sociales entre los jóvenes y las altas tasas de migración interna; lo anterior resultó en la imposibilidad de alcanzar suficientes cadenas de referencias entre iguales durante el período de tiempo del estudio, por lo que no se cumplieron los supuestos necesarios para realizar el análisis de RDS en Lago Agrio.

Adicionalmente, para ambos conjuntos de datos, Harvard FXB utilizó un modelo estadístico que permitió tomar en cuenta el sesgo potencial de los datos obtenidos por referencia de cadena. Esta metodología se podría aplicar a otras poblaciones de refugiados urbanos.

Ecuador es el país de América Latina que más población de refugiados recibe. Las estimaciones de 2016 calcularon a la población de interés en 127,436, de los cuales 60,253 eran refugiados registrados. La mayoría de ellos son colombianos, huyendo del conflicto interno entre el gobierno, los grupos paramilitares, los grupos delictivos y las guerrillas izquierdistas que comenzó en la década de 1960.

Actualmente, muchos refugiados llegan a Ecuador de lugares tan lejanos como Afganistán y Siria. Estos refugiados y migrantes forzados consideran al país como una buena opción, en parte, por su enfoque notablemente progresiva hacia la migración, lo cual ofrece un poderoso contraejemplo a las tendencias mundiales actuales del refortalecimiento de fronteras y la exclusión social de las poblaciones migrantes. El marco jurídico y normativo de Ecuador incorpora plenamente los compromisos internacionales con los derechos de los refugiados.

Los resultados de este estudio demuestran que hay un área considerable de mejora en cómo se aplica esta visión progresiva en las vidas cotidianas de los adolescentes urbanos refugiados en Ecuador. Los problemas persisten, principalmente en la implementación de la normativa y política pública actual; también en el diseño del programa, que enfrenta mayores retos, por los desafíos estructurales, sociales y políticos relevantes para este grupo altamente vulnerable y oculto.

Existen varias opciones para que los refugiados en Ecuador regularicen su situación legal: visas de refugiados, visas de trabajo MERCOSUR (con vigencia de dos años) o visas de dependientes (para aquellos con vínculos familiares en Ecuador). Los enormes retrasos en los procedimientos de asilo y el aumento en los rechazos de refugiados significan que el 75.9% de los jóvenes en Quito y el 57.9% en Lago Agrio reportaron tener un registro de refugiado en curso o bajo apelación, dejándolos en un limbo legal. Las visas de MERCOSUR y de dependientes se subutilizan como alternativas.

Además, a pesar del acuerdo de paz colombiano, los resultados del estudio muestran que la mayoría de los refugiados en Ecuador - 91.0% en Quito y 78.6% en Lago Agrio - no planean regresar a su país de origen bajo ninguna circunstancia.

Ecuador no impone restricciones a la libertad de movimiento de los refugiados al interior del país. El Gobierno les proporciona a los jóvenes refugiados el acceso gratuito a la educación secundaria y a los servicios de salud. El Ministerio de Inclusión Económica y Social proporciona subsidios a familias de bajos ingresos que cumplan determinados requisitos y ofrece apoyo legal a víctimas de violaciones de derechos. Los niños menores de 18 años reciben servicios de protección a través de un sistema descentralizado de Consejos y Juntas Cantonales, que monitorean las políticas y atienden casos individuales de abuso. La Oficina de Defensoría Pública brinda apoyo legal a los refugiados y las denuncias individuales pueden presentarse ante un Ombudsman de derechos humanos independiente que rinde informe a la Asamblea Nacional.

El ACNUR en Ecuador tiene como meta el compensar por los vacíos del sistema. La Oficina lidera múltiples iniciativas a nivel macro que ayudan a coordinar los actores de protección que se encuentran dispersos en el país. Brinda asistencia técnica y capacitación al gobierno y la sociedad civil en temas de refugiados y goza de una relación colaborativa y positiva con el gobierno. ACNUR también fomenta esfuerzos para mejorar las políticas y leyes; por ejemplo, ayudó a impulsar la nueva Ley de Movilidad Humana del país. Además, apoya financieramente a una red de organizaciones sin fines de lucro que trabajan en campo para proporcionar asistencia a corto y largo plazo a los jóvenes refugiados.

Los resultados del estudio muestran que la discriminación y el estigma social afectan negativamente la capacidad de los refugiados para encontrar una vivienda estable, permanecer en la escuela, obtener un trabajo decente y desarrollar conexiones sociales en Ecuador. Por ejemplo, los colombianos refugiados perciben que se les asocia con la criminalidad y el trabajo sexual. La información compartida en los grupos de enfoque sugiere que el racismo contra los refugiados afrocolombianos es particularmente penetrante. También es importante señalar que el ostracismo por parte de las comunidades receptoras se ve agravado por el propio miedo de los colombianos a sus compatriotas. Facciones del conflicto civil colombiano continúan poniendo en riesgo a algunos refugiados que viven en Ecuador. Los jóvenes colombianos informan que el temor a ser descubiertos por otros connacionales tiene un impacto significativo en sus vidas.

Los resultados del estudio indican que esta compleja red de actores no constituye un sistema de protección cohesivo, sino un conjunto de servicios y programas inconexos. Los ministerios y programas pertinentes no tienen un enfoque puntual en los refugiados, por lo que no existe una recopilación sistemática de datos ni se comparte información sobre las necesidades de los refugiados y los casos individuales que requieren atención.

Los esfuerzos a nivel macro para coordinar a los interesados no se traducen en la prestación de servicios de atención directa. ACNUR opera con una brecha financiera significativa, lo que limita el alcance y la visibilidad de los programas que respalda. Según la Oficina de Refugiados del Gobierno, "cualquier proyecto que se dirija a la población refugiada también tiene que considerar a la población nativa porque ... el refugiado en Ecuador tiene que ser solo un niño más". Como resultado, los jóvenes refugiados más vulnerables con diversas necesidades de protección reciben apoyo parcial y otros son olvidados por el mismo sistema. Solo el 15,9%% de los refugiados en Quito y el 11,4%% en Lago Agrio sabían a dónde ir si tenían una queja; 26.9%% en Quito y 45.2%% en Lago Agrio no sabían cuál era el papel de ACNUR.

La asistencia escolar es del 57.2% en Quito y del 80.5% en Lago Agrio. Más de una cuarta parte de los jóvenes refugiados en la capital, así como un 14% en Lago Agrio, no están inscritos¹ en ninguna institución educativa y tampoco han terminado la escuela secundaria. Los jóvenes refugiados urbanos enfrentan varias barreras para acceder a la educación como: requisitos inflexibles de registro escolar; colocación en escuelas lejanas o en escuelas distintas a las de sus hermanos; costos de uniformes y otros gastos imprevistos; inestabilidad económica familiar; embarazo adolescente; y migración interna.

¹ La inscripción se define como estar registrado en una escuela como estudiante, y no equivale a la asistencia regular a la escuela.

Las tasas de asistencia y retención a su vez se ven afectadas por la discriminación y la violencia generalizada en la escuela: el 52.8% de los jóvenes en Quito y el 24.7% en Lago Agrio reportaron que no se sentían seguros en la escuela. Los jóvenes con estatus legal (refugiados, con vida de MERCOSUR o de dependientes) son significativamente más propensos a asistir a la escuela que aquellos en el proceso de solicitud o sin documentación. Este último grupo no puede graduarse de la escuela secundaria o asistir a la universidad debido a su estatus legal. A pesar de la alta demanda de educación superior, casi ningún joven refugiado alcanza el nivel de educación que facilitaría su movilidad social.

Los rezagos educativos se combinan con otros factores para poner a los jóvenes refugiados en desventaja cuando se postulan y compiten por empleos. Por lo anterior, el subempleo se convierte en un problema grave para los jóvenes refugiados, como lo es para muchos ecuatorianos. Las barreras al trabajo limitan las posibilidades de los refugiados para su integración y desarrollo personal. Estas barreras representan una preocupación particular en Lago Agrio, donde el 11.0% de los jóvenes trabajó para alguien fuera del hogar en la última semana, en comparación con el 21.6% en Quito. Los resultados muestran que la capacitación laboral en habilidades específicas es una gran necesidad que no se ha atendido.

Los jóvenes refugiados que consiguen empleo lo encuentran casi exclusivamente en el mercado informal. Muchos trabajan por cuenta propia, venden cosas en los autobuses o en los semáforos o trabajan en salones de belleza, bares y restaurantes. Los jóvenes refugiados a menudo trabajan en entornos peligrosos y de explotación, con bajos salarios y largas jornadas laborales. Durante el año pasado, el 47.2% de los jóvenes trabajadores en Quito y el 15.6% en Lago Agrio sufrieron lesiones en el trabajo. De acuerdo con las entrevistas a actores clave, una pequeña, pero significativa, proporción de jóvenes participa en el trabajo sexual (2.3% en Quito y 0.7% en Lago Agrio) así como en actividades criminales como el tráfico de drogas.

Los jóvenes refugiados urbanos son un grupo demográfico saludable y se benefician de los servicios de atención primaria proporcionados por el Estado, que son generalmente accesibles y gratuitos. Sin embargo, este estudio identificó que existe una necesidad de programas de educación y servicios de salud en temas de salud sexual y reproductiva, así como de programas de tratamiento para la drogodependencia.

Los resultados sugieren que la escasez de alimentos es un problema prevalente para los refugiados más vulnerables y que los programas actuales de apoyo financiero para abordar este problema no son suficientes. También hay claras necesidades que no han sido atendidas con respecto a la salud mental de estos jóvenes: el 29.6% de los jóvenes en Quito y el 57.1% en Lago Agrio mostraron síntomas que indicaban depresión.

Los esfuerzos estatales existentes en Ecuador para enfrentar la violencia sexual y de género no toman en cuenta la vulnerabilidad particular de los refugiados, y los actores clave que participan en sistema de protección no identificaron la violencia sexual como un área prioritaria de atención. Sin embargo, los reportes de los jóvenes sugieren que estos problemas son importantes para ellos. Los hallazgos cuantitativos sobre la violencia sexual son alarmantes, aun considerando que probablemente se

subestima su prevalencia: una quinta parte de los jóvenes en Quito y una décima en Lago Agrio indicaron haber sufrido abuso sexual durante el último año. Aunque el hogar es usualmente una base de apoyo para los jóvenes refugiados, una cuarta parte en Quito y una quinta en Lago Agrio reportaron haber sido víctimas de abuso físico en el hogar y la mayoría de estos no sabía a dónde acudir ante esta situación.

En Quito, los refugiados están ampliamente dispersos geográficamente, tienen escaso acceso al transporte público y pasan gran parte de su tiempo en sus hogares. Una gran proporción de jóvenes refugiados no se sienten seguros en público: 66.3% en Quito y 30% en Lago Agrio. Estos hallazgos, junto con otros mencionados, refuerzan la conclusión de que esta población enfrenta desafíos reales en la integración social y en el desarrollo personal.

De manera agregada, nuestros resultados demuestran la necesidad de una mayor atención y apoyo a las necesidades de los jóvenes refugiados urbanos en Ecuador. Las necesidades persistentes de esta población vulnerable son particularmente importantes y se deben considerar ya que el acuerdo de paz colombiano cambia el contexto político, legal y social para los refugiados que viven en Ecuador.